



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

DOCUMENTO 3

PRESIDENTES POSTERIORES AL FRENTE NACIONAL. AÑOS 70-80-90.

<http://www.banrepcultural.org>

Nombre: _____ Grado: _____ Trimestre: _____

López Michelsen, Alfonso. 1974-1978. <http://prezi.com/tuqbjrovwmse/el-gobierno-de-alfonso-lopez-michelsen>

En su discurso de posesión, el 7 de agosto de 1974, prometió al país cerrar la brecha entre la población campesina y urbana, trabajar por mejorar la situación del cincuenta por ciento más pobre de la población, y promover el cambio. Esta fue la tesis principal de su campaña electoral, que llamó el "Mandato claro". Durante su administración, López Michelsen decretó la emergencia económica para corregir el déficit fiscal, estableciendo un control de gastos de los institutos descentralizados; eliminación de subsidios y reducción del Certificado de Abono Tributario (CAT). Realizó la reforma tributaria y fiscal; estableció el impuesto de ganancia ocasional; triplicó el ahorro nacional; la inversión pública aumentó en un 61% y se incrementaron las exportaciones. A pesar de las medidas encaminadas a detener la inflación, ésta alcanzó el índice más alto de la historia. Por otra parte, López fortaleció las condiciones internas de la economía campesina para retener a esta población en su medio, logrando un aumento del 16% en la producción agrícola. Otorgó 986 títulos y se firmaron 4700 contratos de asignación de tierras; y el crédito agropecuario ascendió a 21 mil millones de pesos. Creó el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) recibió los distritos de riego. Se aumentó en un 200% el salario mínimo en el campo y en la ciudad; se otorgó personería jurídica a 1100 sindicatos; se aumentó en un 40% la capacidad de energía eléctrica; se cambió la figura de "concesión" por la de "asociación" para la exploración petrolera; se construyeron gasoductos y oleoductos por 69 millones de dólares; se estructuró un plan de generación de energía de 2800 millones de dólares; se realizaron planes de vivienda para 246 mil familias; se destinaron 15 412 millones de pesos a planes de salud y se abrieron 30 nuevos hospitales; se destinaron 58 mil millones de pesos para la educación; se creó un millón de cupos para los cuatro niveles educativos; se invirtieron 2706 millones de pesos en construcciones escolares; se destinaron 6643 millones de pesos para vías de comunicación y 1432 millones para mejorar los puertos marítimos: Además, hubo bonanza cafetera y se abrió la carrera militar para la mujer. En política internacional, López sostuvo reuniones con el ex presidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela; Omar Torrijos, de Panamá; y con los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter, de los Estados Unidos. En 1977 participó en una conferencia hemisférica de mandatarios con motivo de la firma del nuevo Tratado del Canal de Panamá. Recibió al presidente de México, José López Portillo; al de Jamaica, Michael Mandley; al secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger; y al rey Juan Carlos de España. Se firmaron tratados de delimitación de áreas marinas y submarinas con Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Haití.

También durante su mandato tuvo que afrontar delicados hechos como un paro nacional, el 17 de septiembre de 1977, efectuado con apoyo de todas las centrales obreras, que dejó un trágico saldo y obligó al gobierno a hacer uso del toque de queda y a acudir a la legislación del estado de sitio; y el paro médico del Seguro Social, que se prolongó durante 50 días. Críticos de su gobierno como Gerardo Molina opinaban: La [administración] que se anunció como dispuesta a cerrar la brecha entre ricos y pobres y entre regiones prósperas y regiones miserables, ayuda a comprender el insondable desasosiego en que vivimos hoy [...] Ahí están, sobre todo, la inflación, el desempleo y los ataques a la moral pública, a los que no son ajenas personas allegadas a las esferas del alto gobierno, para acabar de establecer la situación de una comunidad que se debate inútilmente en busca de una salida que no se puede hallar a través de los parajes habituales.

Julio César Turbay Ayala. 1978-1982

Durante su administración, se concibió el Plan de Integración Nacional (PIN), cuyos objetivos fueron la descentralización económica y el mejoramiento general de la población mediante la integración del país, previendo inversiones por 950 millones de pesos en distintas áreas económicas y sociales. Se le dio primordial importancia al sector de la energía eléctrica, realizando las obras de Chivor II, Paipa II, la térmica del Chinú, Zipaquirá IV y las termoeléctricas de Barranquilla y Cartagena. Además, se construyeron las centrales de San Carlos, Paraíso, la Guaca, el Cerrejón y Zipaquirá. También se intensificó la exploración de yacimientos: se exploraron cien pozos y se hicieron hallazgos como el de Andalucía, Tocaría, Arauca I y II, Palogrande y Apiay. Se elaboró el proyecto minero que permitió la exploración de las minas de carbón de El Cerrejón y de níquel en Cerromatoso. Se invirtieron 96 millones de pesos en la construcción de obras carretables, como la vía hacia la Costa por Bucaramanga, y más de la mitad de la llamada autopista Medellín-Bogotá; se construyeron los aeropuertos de Barranquilla y Cartagena, y se adelantaron obras en el Tapón del Darién. En febrero de 1982 se creó el departamento de Caquetá. Introdujo la televisión a color, y bajo el nombre de Simón Bolívar, adelantó una campaña de alfabetización. En el campo internacional, se aprobó el tratado que aseguró los derechos de

Colombia sobre el Canal de Panamá y el uso del ferrocarril del istmo, y el tratado Vázquez-Saccio para la posesión de los derechos sobre los islotes de Roncador, Quitasueño y Serrana. Por otro lado, el 23 de marzo de 1981 se rompieron relaciones con Cuba. Al comienzo de su mandato, Turbay dictó un Estatuto de Seguridad en ejercicio del artículo 121 de la Constitución Nacional, para contrarrestar la actividad subversiva y de narcotráfico. Este estatuto fue objeto de severas críticas dentro y fuera del país. Durante la administración Turbay se vivieron momentos críticos en Colombia, como el robo de más de cinco mil armas del Cantón Norte de Bogotá por parte del Movimiento 19 de Abril y la toma de la embajada de la república Dominicana en Bogotá durante 61 días, por parte del mismo grupo guerrillero; se recrudeció el secuestro y la extorsión y surgió la agrupación armada Muerte a Secuestradores (MAS). En marzo de 1981 se firmó la "ley de amnistía", orientada a facilitar la entrega de ciudadanos levantados en armas, pero no tuvo gran acogida. Luego, en noviembre de ese mismo año, con base en una propuesta del ex presidente Lleras Restrepo se constituyó la primera Comisión de Paz, que se desintegró en mayo del siguiente año. Creó la Comisión Nacional de Valores; promulgó las reformas del Código Penal, del Código de Procesamiento, de la educación secundaria y del Congreso. En este tiempo creció la economía "subterránea", fundamentada en actividades de narcotraficantes y contrabandistas. Entre el 3 y el 10 de febrero de 1981, Turbay no ejerció el poder ejecutivo por un viaje que realizó a Estados Unidos por motivos de salud lo reemplazó el designado Víctor Mosquera Chauz.

EL GOBIERNO DE BELISARIO BETANCUR. 1982 - 1986

El proyecto económico del programa de gobierno de Belisario Betancur aspiraba a disminuir la brecha entre los pobres y los ricos; vale decir, aspiraba a sentar las bases de una sociedad igualitaria en las que las masas participan del desarrollo económico y social de la cultura, como corresponde a una sociedad con una estructura moderna en sus diversos sectores económicos y sociales.

Dicho programa se concretó en el Plan de Desarrollo **Cambio con Equidad**, cuyos puntos básicos se definieron en torno a la reactivación de la producción sobre la base de unos precios estables y la consolidación del desarrollo. Con ello buscaba aumentar el ahorro interno, incrementar la capacidad de generar divisas, estimular al sector empresarial y desarrollar las relaciones entre los diversos sectores de la economía, de tal manera que el conjunto de las medidas económicas disminuyera las presiones inflacionarias, y al mismo tiempo contribuyera a aumentar los ingresos de los trabajadores.

La política económica del gobierno de Belisario Betancur se desarrolló a lo largo de tres etapas más o menos diferenciadas. En la primera tenemos como característica el ensayo de resolver la situación del sector financiero, el control del crecimiento de los precios y otorgar al conjunto del sistema económico la liquidez necesaria para recobrar el ritmo de la actividad productiva. Durante la segunda etapa se trató de detener la caída de las divisas internacionales y mermar el déficit fiscal. La tercera, se dedicó al manejo de las presiones de la demanda agregada sobre la oferta. Con el propósito de salir del estancamiento, se trató de orientar el consumo hacia la producción nacional y de apoyar actividades, que por estar interrelacionadas con otras, contribuían a la reactivación del conjunto de la economía nacional. La estrategia económica se orientó, pues, a frenar las importaciones de bienes y de servicios que el país estuviera en condiciones de producir.

En 1984, este proceso continuó su curso. La industria manufacturera experimentó un significativo crecimiento, alcanzando en algunas ramas los niveles más altos de la década. Igualmente asistimos a un proceso parecido en el sector agropecuario, que tuvo su incidencia en el crecimiento del sector del comercio, con una tasa mayor que en los tres años anteriores.

El proceso de paz

Cuestión fundamental en el programa de la administración Betancur fue la cuestión de la pacificación del país, es decir, la política gubernamental para atraer a la vida civil a los diversos grupos armados que han operado en la nación a lo largo de muchos años.

En épocas anteriores el pensamiento que había predominado en los distintos gobiernos había sido el enfoque militarista para obtener la pacificación, es decir, derrota militar total de los alzados en armas (piénsese en el Estatuto de Seguridad de la Administración Turbay Ayala).

Para el presidente Betancur se trataba de dar una solución política al problema de la violencia, lo que significaba encontrar y eliminar las causas subjetivas y objetivas que generan la insurgencia, la violencia guerrillera.

Así pues, la estrategia para la obtención de la paz debía tener en cuenta tres aspectos fundamentales:

- * Amnistía amplia para los delitos políticos y conexos.
- * Reformas políticas, económicas y sociales;
- * La integración de una Comisión de Paz que entrara en contacto con los alzados en armas para promover las negociaciones con éstos.

El primero de estos puntos se concretó por parte del Estado en la Ley 35 de 1982, del 19 de noviembre, que se constituyó en una de las leyes más amplias que se hayan promulgado en el país. La ley de Amnistía no produjo de inmediato los efectos que se esperaban de ella, entre otras cosas por la tardanza en realizar el diálogo gobierno - guerrillas y por la tardanza en poner en práctica medidas concretas para llevar a cabo el proceso de rehabilitación.

La Comisión de Paz permaneció inoperante hasta el mes de febrero de 1984.

Entre la expedición de la Ley de Amnistía para los delitos políticos y el primer acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del 28 de marzo de 1984, transcurrió un lapso de quince meses. De casi dos años hasta la firma de los Acuerdos de "Cese de Fuego y Diálogo Nacional" con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) del 24 de agosto de 1984, también aceptado por un sector del grupo Autodefensa Obrera (ADO), explicable por las posiciones políticas e ideológicas que frente a la pacificación sostenía el entonces ministro de la defensa, general Fernando Landazábal, claro exponente en el país de la doctrina de la seguridad nacional y de la mano dura para los alzados en armas.

El abandono del Diálogo Nacional, impulsado por el M-19 inicialmente, por parte de este grupo, hubo de radicalizar a aquellos sectores partidarios del tratamiento militar de la insurgencia.

Como resultado político de la aceptación y continuación de los acuerdos de paz propiciados por el gobierno, las FARC prohíjan la formación de un nuevo partido político, la Unión Patriótica (UP), que se constituye en una alternativa de participación política de esta agrupación por cauces institucionalizados por las leyes. También el M-19, en 1985, a partir de la reunión del "Congreso de los Robles", pudo haber derivado hacia una expresión política partidista como la de la UP, pero la prohibición por parte del gobierno de llevar a cabo tal congreso eliminó esta posibilidad en su mismo origen, por lo cual el M-19 enfocó su esfuerzo al fortalecimiento

de la tendencia militarista como lo muestran la serie de ataques y enfrentamientos militares con las fuerzas armadas, que culminaron trágicamente en el asalto al Palacio de Justicia y la masacre de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual además se impulsó todavía más tanto a nivel de las fuerzas armadas como de diversos estamentos sociales (empresarios, la prensa), la vieja concepción 'de liquidar militarmente la insurgencia izquierdista, echando en saco roto la solución social y política, es decir, echando a un lado las connotaciones sociales y económicas que han enmarcado a la violencia de tantos años

Virgilio Barco. 1986-1990.

En las elecciones presidenciales de 1986 Virgilio Barco fue electo por más de cuatro millones de votantes, superando a Álvaro Gómez, su contendiente conservador, por más de millón y medio de votos. Al ocupar la presidencia puso en marcha el controvertido esquema de "gobierno-oposición", con el cual buscaba superar los vestigios del bipartidismo que, en su concepto, bloqueaba el sistema político, impedía la crítica y desvirtuaba el papel de los partidos, al concentrar su atención en la distribución de sus cuotas burocráticas. La respuesta del conservatismo a este esquema fue la "oposición reflexiva", absteniéndose de participar en la administración. Los primeros meses de su gobierno fueron tormentosos: además de la oposición conservadora al nuevo esquema, tuvo que afrontar los numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos de paz firmados durante el mandato de su antecesor. A ello se sumaron numerosos atentados guerrilleros y el terrorismo vinculado con el narcotráfico.

En general, el terrorismo constituyó el problema más inquietante de su gestión. El gobierno combinó entonces la inversión estatal para mejorar las condiciones de los sectores socialmente deprimidos, con el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Para subsanar los problemas creados por la escasa inversión estatal en ciertas regiones y sectores sociales, el gobierno de Barco continuó e impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y puso en marcha el Plan de Lucha contra la Pobreza. De otra parte se concentró en el impulso a las reformas en la administración de justicia, de la estructura agraria y urbana y de las instituciones nacionales esfuerzo este último que sería culminado en el gobierno de su sucesor, Cesar Gaviria, mediante la adopción de una nueva Constitución. En lo que tuvo que ver con el narcotráfico, mantuvo una política de confrontación total y de búsqueda de una posición internacional que no sólo exigiera que la lucha contra los traficantes fuera asumida por los países productores, sino también por los consumidores, los que suministraban los químicos para su procesamiento, lavaban los dólares procedentes de la actividad y proveían de armas a los traficantes. A finales de su gobierno, las gestiones de paz que se venían desarrollando permitieron llegar a un acuerdo con el Movimiento 19 de Abril, M-19, mediante el cual el grupo guerrillero se desmovilizó e inició su

participación en la vida política institucional, bajo la denominación de Alianza Democrática M-19. Tales esfuerzos se vieron seriamente amenazados a raíz del asesinato de Carlos Pizarro, el máximo líder del movimiento y candidato a la Presidencia de la República. De igual forma, otros asesinatos de candidatos presidenciales, el de Bernardo Jaramillo Ossa, de la UP, y el de Luis Carlos Galán, del liberalismo, hicieron temer por el proceso electoral que se avecinaba. Sin embargo, la crisis fue sorteada y las elecciones se adelantaron sin contratiempos. Una vez concluido su período presidencial, Barco ocupó nuevamente la embajada ante la Gran Bretaña, para luego regresar a Bogotá.